



## **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

### **SALA LABORAL**

### **AUDIENCIA**

Medellín, octubre 20 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-017-2022-00126-01  
Demandante: FELIPE OCHOA CÁRDENAS  
Demandado: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.S., SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ Y LA AFP PROTECCIÓN  
Asunto: AUTO DECRETO DE PRUEBAS

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia,

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

### **ANTECEDENTES**

Pretende el actor se declare que las patologías que dieron lugar a la calificación de PCL del 19.2% corresponden a padecimientos de origen profesional, generadas en razón al desconocimiento de los deberes del empleador de cuidado y protección, por lo que reclama de ZENÚ el resarcimiento pleno de perjuicios en los términos del artículo 216 del CPT. De forma consecuente al variar el origen de la calificación demanda de la ARL el pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial y el reajuste en los pagos de las incapacidades en tanto de tener un origen profesional su liquidación corresponde al 100% del IBC.

Como elementos de prueba, entre otros adosó unas imágenes y videos con las que pretende reconstruir o representar la labor que realizaba y que acusa como generadora del daño que demanda sea reparado (página 47 – archivo N° 1 que contiene un link de acceso a una carpeta de one-drive). Frente a esta prueba la accionada ZENÚ en la contestación de la demanda refirió que debía de desecharse al considerar que su exhibición trasgrede el derecho a la intimidad en tanto evidencia el proceso productivo de la entidad (página 42 – archivo N° 6)

Dentro de la diligencia que trata el artículo 77 del CPTSS, en la etapa de decreto de pruebas la falladora de instancia negó la petición de exclusión de las pruebas de imágenes y videos al considerar que las mismas no tienen la potencialidad de revelar el proceso productivo de ZENÚ entendido este como el conjunto de operaciones para la transformación de materia prima, la maquinaria utilizada, entre otros elementos que no se exhibieron.

Luego, justificado desde la necesidad de generar mayor claridad de las pretensiones decretó como prueba de oficio la calificación del actor de PCL por parte del Centro de Estudios en Derecho y Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad CES, cuyos honorarios estableció a cargo de las accionadas ZENÚ S.A.S, la ARL SURA y LA AFP PROTECCIÓN en partes iguales.

En lo atienen a la prueba de interrogatorio de parte al representante legal de la ARL SURA que fuera solicitado por la demandada Zenú negó su decreto al hallarlo inconducente de cara al objeto del debate que corresponde a asuntos técnicos de la calificación de PCL sobre los cuales el representante legal no ofrecería elementos de juicio.

Inconforme con la decisión de decreto de pruebas fue **recurrida por la demandada Zenú** presentando diferentes recursos, pero en lo que a esta corporación atañe realizó los siguientes reproches a través del recurso de apelación:

Frente a las pruebas de fotografías y videos aportados con la demanda, refirió que su integración al proceso transgrede el artículo 29 de la Constitución al ser irregularmente aportados por violación al derecho a la intimidad. Señaló que el actor con su actuar quebrantó el reglamento interno de la compañía cometiendo una falta grave. Insistió en que los videos revelan el proceso productivo y la maquinaria utilizada por el trabajador.

También recurrió la negativa de decretar el interrogatorio de parte al representante legal de la ARL SURA la que se considera necesaria y pertinente ya que a través de ella se buscará la confesión, señalando el deber que tiene éste de conocer los contornos y aspectos relevantes del trámite.

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 la parte demandante presentó escrito donde expone la pertinencia de la prueba referente a imágenes y videos con la que se busca demostrar el daño causado por el empleador. En adición expuso que el decreto de pruebas no es una actuación susceptible del recurso de apelación atendiendo a la consagración del artículo 65 del CPTSS. A su turno la accionada industrias Zenu reiteró los argumentos de defensa expuestos en el recurso de alzada.

### **CONSIDERACIONES**

Atendiendo a las premisas expuestas corresponde a esta corporación resolver las réplicas de la activa referentes al decreto de pruebas, asunto que es susceptible del recurso de apelación tal como lo establece el numeral 4° del artículo 65 del CPTSS, donde la falladora de instancia negó el decreto de la prueba de interrogatorio de parte.

Ahora en lo atinente al decreto de las pruebas de imágenes y videos, contrario a lo expresado por la activa en el escrito de alegatos de conclusión referente a la

improcedencia del recurso de apelación contra el auto que decreta una prueba atendiendo al listado del artículo 65 del CPTSS razona la corporación que el reproche supera la esfera del decreto de pruebas y comporta un debate de protección a derechos fundamentales, en este caso, la alegada transgresión al derecho a la intimidad al tachar de ilícita la prueba, por tanto es un asunto de trasciende a la validez del trámite y frente al cual ha de garantizarse el derecho de contradicción, lo que habilita la intervención de esta corporación para pronunciarse al respecto.

Pues bien, frente al primer reparo, eso es el decreto de la prueba de interrogatorio al representante legal de la ARL SURA relevante es indicar que en los términos del artículo 53 de CPTSS modificado por el artículo 8° de la Ley 1149 de 2009 el Juez puede rechazar la práctica de pruebas que estime inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. Norma que ha de complementarse con lo reglado por el artículo 168 del CPG que refiere a la posibilidad de rechazar de plano el decreto de pruebas que estime impertinentes, inconducentes, manifiestamente superfluas o inútiles.

Análisis que ha de realizarse en cada caso en tanto los presupuestos de admisibilidad de la prueba responden a las particularidades de cada reclamación, donde de cara a las pretensiones, la norma aplicable y las reglas de decisión, ha de establecerse la procedencia de la prueba.

Ahora bien, consagra el artículo 198 del C.G.P la prueba de interrogatorio de parte, como medio probatorio por el cual se indaga a los directamente involucrados en el litigio por los hechos en discusión, con la posibilidad que de éste se extraiga ya sea una confesión cuando se trata de aspectos adversos al declarante, o una declaración respecto a lo demás hechos debatidos; dichos que valorados por el funcionario judicial en conjunto con los demás elementos de prueba, permitirán construir una versión de los hechos y emitir una decisión que resuelva el conflicto planteado.

En el caso concreto, insiste la recurrente en la petición del interrogatorio a la ARL SURA pues en su sentir de sus dichos podrán desprenderse una confesión, afirmación que en nada rebate los argumentos de la falladora de instancia para negar la práctica de esta prueba, que lo fue desde el ámbito de la inconducencia, entendida esta como la aptitud del medio de prueba para demostrar el hecho alegado.

Ahora bien, de la lectura conjunta de la demanda y sus pretensiones se revela que el actor reclama una redefinición del origen de los padecimientos que soporta, toda vez que en su sentir, corresponden a patologías de origen profesional. A partir de esta variación del origen de las patologías elabora una serie de pedimentos, dirigidos al empleador y a la ARL.

Con esta comprensión del caso encuentra la Corporación que la prueba negada no tendría la capacidad de producir el resultado esperado, en tanto de cara al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2002 y adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el estado de invalidez de un afiliado al Sistema General de Pensiones debe establecerse **mediante la valoración científica** que efectúan entre otras, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL; las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte, las EPS, las Juntas de calificación de Invalidez del orden regional y Nacional, a la vez que pueden ser controvertidas a través del proceso ordinario laboral, empero la eventual modificación de tal experticia siempre deberá estar informada por criterios técnicos, provenientes ora de un dictamen, ora de un perito, ora de un testigo técnico.

Criterios que no se cumplen en este evento toda vez que la recurrente no demuestra cómo el representante legal de la ARL, de quien se desconoce su cualificación, podrá informar sobre tales aspectos técnicos necesarios para ilustrar al Juez, siendo diametralmente opuesto al deber de información sobre los

contornos del caso, toda vez que no puede exigírsele a un representante legal que tenga una formación académica en temas médicos y de valoración del daño.

Así las cosas, dada la falta de conducencia y utilidad del interrogatorio de parte al representante legal de la ARL SURA, se confirma su negativa.

Por otra parte, referente a la transgresión al debido proceso a través de las imágenes y videos aportados con la demanda, la recurrente sustenta tal valoración desde dos premisas. 1) la transgresión a los deberes contractuales por violación grave al reglamento interno de la compañía y 2) por violación al derecho a la intimidad al revelarse información relacionada con los procesos productivos de la entidad y las herramientas de trabajo

Sobre el primer reproche, existe una errónea apreciación de la situación, en tanto, al margen de la existencia de una eventual conducta sancionable desde el ámbito disciplinario laboral, *per se* no genera la ilicitud de la prueba. Se trata de escenarios disímiles de reproche y con resultados diferentes, destacando que escapa a la esfera de este debate la eventual calificación de la conducta de toma de imágenes y presentación en estados judiciales con sus consecuencias de cara a la posibilidad disciplinaria del empleador dentro del contrato de trabajo.

Por otra parte, relativo a la afectación al debido proceso por incursión en la intimidad de la parte accionada, resulta necesario acudir a su definición constitucional, así:

*“ARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.*

*“En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.*

*“La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.*

*“Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.”*

Derecho a la intimidad que ha sido entendido por la Corte Constitucional como *“área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley”( T- 696 de 1996).*

Ahora en lo atinente a los secretos industriales, el artículo 260 de la decisión 486 de 2000 de la CAN, al referirse a la competencia desleal vinculada la propiedad industrial define el secreto empresarial como:

*“...cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:*

*a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;*

*b) tenga un valor comercial por ser secreta; y*

*c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.*

*La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.*

De cara a esta descripción no todos los datos referidos a un proceso productivo tienen el carácter reservado en tanto requiere que se trate de información que no sea de fácil acceso, que tenga un valor comercial y que se hayan tomado medidas que impidieran su pública divulgación.

Con estas premisas verificó la corporación las imágenes reprochadas, en total 5 fotos y 7 videos, hallando que:

Las fotos en su totalidad tienen como propósito mostrar la ubicación y transporte de elementos, para ubicarlos en estanterías totalmente vacía o ubicados en una canasta plástica, así como una carreta para estibas. Estos elementos no corresponden a una máquina de producción, sino a utensilios de almacenamiento y transporte que bien puede ser usados en otras industrias, que no revelan nada de la forma de producción de la accionada, además que nula es la prueba de la pasiva respecto al valor económico de esta información o el perjuicio que puede derivarse de mostrar que Zenu utiliza canastas plásticas para almacenamiento, estantería para ubicación de elementos y carretas para su transporte.



A su turno los videos dan cuenta del movimiento y transporte de elementos, a saber: una canasta plástica con algo que pareciera los productos ya empacados de Zenú, el movimiento de unas barras, el cargue de rollos de bolsa plástica y el transporte en la carreta de estibas de cajas que no permiten ver su contenido. En lo que respecta al entorno de las imágenes no corresponde a una zona de



producción, por el contrario, se trata de salones de almacenamiento con mesas y un pasillo sin ningún elemento, no existe maquinarias, materias primas o algún factor que revele algún secreto que pudiera tener un valor comercial.

En suma, toda vez que la prueba no revela elementos de la intimidad o secretos comerciales de la empresa y sin que sea del caso calificar las consecuencias que desde el ámbito disciplinario tiene que el actor haya divulgado estas imágenes, imprósperos son los reclamos de la demandada Zenú, conclusión expuesta por la falladora y que se confirma en esta instancia.

Atendiendo a las premisas del artículo 365 del CGP se condena en costas a la recurrente, tasando las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de decisión laboral **CONFIRMA DE FORMA TOTAL LA PROVIDENCIA RECURRIDA**. Costas en esta instancia a cargo de la accionada ZENU, de las que se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV.

Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para la continuación del trámite. Lo resuelto se notifica en estados.

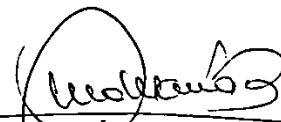
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 24 de octubre de 2022